Bake prozesua indartzeko Foro Soziala | Foro Social para impulsar el proceso de Paz | Forum Social pour impulser le processus de paix | Social Forum to promote the Peace process

CONCLUSIONES DEL IV FORO SOCIAL:

"Facilitar la reintegración de las personas presas o huidas por motivaciones políticas"

Donostia, 10 de Marzo de 2017 e Irún 25 y 26 de Enero 2018

Abogamos por fomentar y alcanzar un consenso suficiente, transvesal, para lograr una solución integral a las cuestiones relacionadas con la reintegración de las personas presas y huidas por delitos de motivación política acaecidos en el marco del denominado conflicto vasco.

Un consenso que se articule en primera instancia a nivel social, político e institucional en la Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra, y que, en su desarrollo, cuente con la participación de dichas personas huidas y expresas.

En el marco de la necesaria reconciliación en la sociedad vasca y navarra, entendemos que este consenso debería preparar, acordar e implementar una hoja de ruta relativa al retorno de las personas presas y huidas por delitos de motivación política. Hoja de ruta que deberá contemplar de manera especifica la situación de desigualdad que enfrentan las mujeres tanto en la carcel y huidas como a la hora de la reintegración. Hoja de ruta que sea guía de actuación para el conjunto de actores involucrados.

Desde el Foro Social proponemos que dicho consenso, que, como señalamos, habría que construir entre instituciones vascas, sociedad civil y las personas presas uy huidas, se base en los siguientes principios:

Apartado 1.-

Personas presas

1.- Desactivación de las medidas de política penitenciaria que contravienen derechos humanos fundamentales, van en contra del tratamiento humanitario de las personas presas y son contrarias a los estándares internacionales. En nuestra opinión, éste es un urgente primer paso, que implica:

- La inmediata excarcelación, por parte de las autoridades competentes, de las personas presas con enfermedades graves o incurables o de edad avanzada.

- El fin del alejamiento de las personas presas de su entorno familiar y social mediante su traslado a cárceles más cercanas a su domicilio, para que puedan fortalecerse los lazos que contribuyan a su reintegración. Por tanto, cabe reclamar a las autoridades competentes la aprobación de las peticiones que cada presa o preso pueda formular solicitando traslado a cárceles en la Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra.

- Las personas presas tienen derecho a conocer con certeza cuál es la expectativa de duración de su condena. Por ello, estimamos imprescindible el fin de todas las medidas tendentes a retrasar el momento de la puesta en liber-

tad de quienes ya han cumplido efectivamente su pena. En particular, deben modificarse los artículos de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, que dejen sin efecto el principio de equivalencia de efectos de las condenas dictadas en otros Estados miembros de la Unión Europea, establecido en la Decisión Marco 675/2008/JAI, impidiendo que se tengan en cuenta para su cómputo en el Estado español las condenas impuestas y cumplidas en el Estado francés.

- Las personas presas con condenas de larga duración, equiparables a la cadena perpetua, deben tener derecho a la revisión de las mismas para garantizarles una expectativa razonable y factible de excarcelación. En consecuencia, deberían derogarse, por inhumanas, las normas que eliminan cualquier esperanza de excarcelación.

- Es indispensable poner fin a la aplicación sistemática de medidas de aislamiento y primer grado a los presos y presas vascas por delitos de motivación política.

- La garantía del derecho de las personas presas a la intimidad y la vida familiar, con comunicaciones desarrolladas en condiciones adecuadas y dignas. En este sentido, abogamos por la desaparición de las limitaciones sobre las personas con derecho a visita, por el fin del control indiscriminado de las comunicaciones orales y escritas y de las trabas al euskara. Así mismo, estimamos que ha de posibilitarse una relación estrecha de estas personas con sus hijas e hijos, especialmente en el caso de madres que tengan consigo a sus hijos o hijas en prisión.

- El derecho a la educación y al estudio debería poder ejercerse sin restricciones, habilitando los mecanismos necesarios para eliminar las actuales cortapisas.

2- Fin de la excepcionalidad penitenciaria para con presas y presos por delitos de motivación política, como paso previo al desarrollo de una justicia de carácter transicional. Es deseable que las normas se adecuen a la realidad social, y en ese sentido creemos fundamental que se retorne a la legalidad ordinaria previamente existente. Esto se traduce en los siguientes pasos:

- Fin de la política de rechazo sistemático a la progresión de grado, al otorgamiento de permisos y a las redenciones a los presos y presas vascas por delito de motivación política.

- Derogación de las medidas excepcionales contenidas por la LO 7/2003 de 30 de junio de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas referidas a los requisitos para beneficios penitenciarios, permisos de salida, clasificación en tercer grado y libertad condicional. Dichas medidas hacen imposible de hecho el objetivo de reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad. Mientras no se proceda a su derogación, se debe rechazar la aplicación retroactiva de la misma.

- En relación con lo anterior, concesión inmediata de la libertad condicional a los presos que hayan cumplido los 2/3 o ¾ de la condena.

- Derogación de la prisión permanente revisable aprobada por la Ley Orgánica 1/2005 de 30 de marzo.

- Reforma de la legislación para que se devuelvan a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria naturales las competencias sobre el cumplimiento de la pena impuesta, resolviendo los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos. A estos jueces corresponde la salvaguarda de los derechos de las personas presas, corrigiendo los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse. Estas competencias se encuentran otorgadas actualmente al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en la Audiencia Nacional. Del mismo modo, los recursos que pudieran plantearse a dichas decisiones deberían ser resueltos por las Audiencias Provinciales correspondientes.

3.- Transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra de la competencia de prisiones, para cumplir con lo señalado en el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento del Fuero. Junto a ello, proponemos la elaboración de un plan de reintegración, temprano e individualizado, de las personas presas, plan que cuente con el consenso de instituciones vascas y la participación de actores sociales así como de las propias personas encarceladas. Para asegurarlo, habrá que facilitar la relación y el intercambio de opiniones entre éstas, la ciudadanía vasca y las instituciones competentes.

Planteamos las siguientes bases para este plan:

1) El reconocimiento del escenario político, en el que la sociedad vasca está transitando de un estadio de violencia y enfrentamiento a otro de paz, convivencia y reconciliación que requiere de la implicación de todas las partes.

2) El respeto al derecho de todas las víctimas a la justicia, la memoria, el reconocimiento y la reparación.

3) Asegurar que estas personas presas puedan ejercer sus derechos a la reintegración, participación y contribución al proceso de paz, normalización y reconciliación mediante la aplicación de terceros grados, libertades condicionales tempranas y otro tipo de medidas que faciliten su pronta reintegración.

4) En el marco del proceso de paz, normalización y reconciliación vasco, la implicación de las propias personas presas por delitos de motivación política en el proceso, profundizando en los caminos de rechazo individualizado al uso de la violencia, en su compromiso inequívoco con las vías pacíficas y democráticas, y el reconocimiento expreso del daño en su caso causado, como voluntad clara de reparación del mismo.

Por su parte, el Foro Social, en coordinación y con la facilitación del Grupo Internacional de Contacto, está dispuesto a habilitar los marcos necesarios para que los agentes políticos y sociales puedan tratar de alcanzar el consenso básico que posibilite la puesta en marcha, a no muy largo plazo, de una hoja de ruta factible.

Apartado 2.-

Personas huidas por temor a posibles acusaciones de haber cometido delitos de motivación política

Durante todos estos años de conflicto son muchas las personas que han huido del país por temor a ser acusadas de haber cometido delitos de motivación política. La práctica generalizada de la tortura y malos tratos en el marco de detenciones en régimen de incomunicación -práctica denunciada durante décadas y constatada y detallada en el reciente informe del Gobierno Vasco- y el temor a sufrir ese mal trato y tortura han contribuido a este hecho.

Este temor se ha visto incrementado por la posibilidad de ser condenadas en base a auto o hetero-inculpaciones obtenidas de las personas detenidas. En este sentido, conviene recordar que son muy numerosas las condenas basadas en declaraciones policiales inculpatorias que se ha denunciado que fueron obtenidas bajo tortura o malos tratos.

Esta situación ha sido posible ya que durante décadas las declaraciones policiales han sido consideradas por los Tribunales prueba suficiente para basar una condena. Y es que no es hasta fechas relativamente recientes cuando el Tribunal Supremo acuña la doctrina de que la declaración policial no tiene, ni puede tener, naturaleza de prueba y por lo tanto, no puede servir de base para una condena.

El colectivo de personas huidas, tras vivir muchos años bajo duras condiciones de vida y en situaciones de máxima precariedad, está compuesto actualmente por personas de avanzada edad, muchas de las cuales padecen enfermedades, y en algunos casos, graves.

Entendemos que el proceso de normalización y reconciliación actualmente en curso también debe responder a la especificidad de este colectivo buscando las necesarias soluciones. La normalización del país así lo requiere.

En esta perspectiva, consideramos necesario alcanzar un amplio consenso para definir un proceso escalonado y ordenado de vuelta del conjunto de personas huidas, facilitado por una justicia de carácter transicional.

Desde el Foro Social proponemos que dicho consenso, -que, reiteramos, habría que construir entre instituciones navarras y vascas, sociedad civil y las personas huidas y deportadas-, se base en los siguientes criterios:

- Facilitar por parte de las instituciones pertinentes la vuelta de aquellas personas huidas contra quienes no existan procedimientos judiciales abiertos o que, si los hubo, hayan prescrito.

- Garantizar la vuelta de aquellas personas sobre las que únicamente existan acusaciones basadas en testimonios obtenidos bajo tortura, adoptando las medidas necesarias para ello.

- En el marco de una justicia de carácter transicional, se debería articular una solución jurídica para todas aquellas personas que sufren aún lo que cabe denominar la “pena de deportación”, es decir, la estancia prolongada y restringida en un tercer país al que la persona deportada fue enviada por las autoridades sin mediar procedimiento judicial alguno y, por lo tanto, resolución alguna que acuerde esa situación.

- La no utilización de la cercana prescripción de procedimientos judiciales con objetivos represivos, reactivándolos días antes de que se produzca dicha prescripción -como ha ocurrido ya en varias ocasiones-, imposibilitando el regreso o prolongando penas de prisión.

- El cese de la negativa por parte de la Audiencia Nacional a dar información a los abogados de personas huidas sobre su situación jurídica, impidiendo así el estudio de las posibilidades de avanzar hacia a su posible regularización jurídica.

- Recomendamos así mismo que las personas presas, expresas, huidas y deportadas sean participantes activas en el desarrollo del proceso de paz y normalización.

En el marco de la legislación ordinaria, sería necesario buscar medidas de solución inspiradas en criterios humanitarios para quienes lo requieran por motivos de avanzada edad, o por padecer enfermedades graves y/o incurables, facilitando su vuelta a casa.

En lo relativo a los casos restantes, sería necesario determinar medidas de justicia transicional para quienes decidan volver en el marco de un proceso de paz y reconciliación, mediante las cuales, en base a las acusaciones y circunstancias personales, se busquen en la medida de lo posible penas alternativas a prisión o de excarcelación temprana o prisión atenuada.

Apartado 3:

Reintegración de personas expresas y huidas

Constatamos que en el caso de las personas excarceladas tras cumplir condena por este tipo de delitos, tal reintegración es más dificultosa como consecuencia de los perniciosos efectos derivados de las penas impuestas y de su ejecución.

Constatamos que estas personas sufren de discriminación y desigualdad de derechos respecto al resto de ciudadanas y ciudadanos libres, además de las dificultades propias de la reintegración.

Según la explicación de los "Estándares Integrados" de Naciones Unidas "todos los procesos de paz relacionados con conflictos armados han de pasar por una etapa en la que los combatientes dejan sus armas y se reintegran a la vida civil". Esta compleja etapa recibe el nombre de DDR, Desarme, Desmovilización y Reintegración.

Según lo definen estos estándares, la etapa DDR ha de ser un componente de una estrategia más amplia de construcción de paz. Es, junto a otros aspectos, uno de los ingredientes para lograr la estabilidad y la construcción de paz. Otros elementos fundamentales los constituyen los acuerdos políticos entre fuerzas representativas del país, las reformas de los sistemas de seguridad y legislación relativa, así como todo el proceso que debe garantizar a las víctimas del conflicto la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición.

Un proceso de paz es un conjunto complejo de iniciativas y el DDR forma parte de ellas.

Precisan las Naciones Unidas que, para que tenga éxito, el DDR en ningún caso ha de significar claudicación, despolitización, demonización, marginación, soborno, subordinación o, especialmente, humillación. Cuando se pone en marcha, es sabido ya que se ha producido el cese voluntario de las acciones violentas y se están dando pasos hacia el desarme. En consecuencia, correctamente desarrollado el DDR debe servir para prevenir futuras expresiones de violencia y contribuir a la reconciliación social.

Constatamos que no hay fórmulas únicas en los procesos DDR. Cada país y cada contexto es un caso singular. Cada experiencia es única, pero es posible aprender mucho de otros casos y de las lecciones del pasado.

Dentro del DDR, la Reintegración es un proceso por el que, una vez producida la desmovilización, las personas implicadas (en nuestro caso, las pertenecientes a ETA), y quienes hayan estado presas o huidas acusadas de serlo, "adquieren la condición de civiles y obtienen un empleo sostenible e ingresos regulares", en palabras de la ONU, respondiéndose también a las necesidades de salud y de carácter psicosocial que se les hayan generado.

La definición señala que "es esencialmente un proceso social y económico que se produce en primer lugar en las comunidades", con un marco cronológico abierto.

Forma parte del proceso de paz de un país, constituye una responsabilidad nacional y a menudo suele gozar de la asistencia exterior a largo plazo.

Suele dividirse en dos fases. Una primera, la urgente y breve, en la que se procede a satisfacer las necesidades económicas y sanitarias básicas, obteniendo una estabilización a corto plazo. En la segunda etapa se trata de **proporcionar medios de vida sostenibles**, así como asistencia sanitaria, social, económica, educativa y ocupacional adecuada.

Junto con el proceso de verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición para las víctimas del conflicto, la reintegración es un proceso fundamental para garantizar la reconciliación de un país que transita de la violencia a la paz.

En el caso vasco, y dadas sus características propias, ese proceso se concreta básicamente en la reintegración plena de las personas presas y huidas acusadas de cometer delitos de motivación política. Hablamos principalmente de la reintegración de las personas que salen de prisión o de aquellas huidas que retornan al país.

Por reintegración plena entendemos aquella que:

1) Atiende a las necesidades económicas y laborales y de formación;

2) De asistencia sanitaria, sicológica y social.

3) Con garantía de derechos civiles y políticos.

Considerando que la reintegración plena, en igualdad de derechos y sin discriminación, debería ser un objetivo no solo de dicho colectivo sino del conjunto de la sociedad en aras a un proceso de reconciliación social y plena normalización, entendemos necesario:

- Proponer la realización de un informe que recoja de manera rigurosa y exhaustiva las trabas y dificultades tanto legales como sociales a las que se enfrentan estas personas expresas y huidas para, en una segunda fase, poder determinar el conjunto de intervenciones institucionales y sociales necesarias desde el ámbito público y privado.

- Dicho informe deberá contar con un enfoque especifico de genero desde la evidencia de que la desigualdad atraviesa todos los ámbitos de la sociedad y, por tanto, también afecta de manera especifica a las mujeres en sus procesos de reinserción y a las propuestas que los desarrollen.

- Constituir un marco de colaboración entre agentes públicos (instituciones públicas del país), privados (ámbito empresarial, sindical, asociativo) y asociaciones dedicadas a la reintegración de los citados colectivos con el objetivo de diseñar, acometer y hacer seguimiento de las intervenciones y planes necesarios para lograr la reintegración plena y en igualdad de derechos de las personas afectadas en base al informe anteriormente citado.

IV FORO SOZIALEKO ONDORIOAK:
“Arrazoi politikoengatik preso edo ihesean dauden pertsonen gizarteratzea erraztea”

Donostian, 2017ko martxoaren 10ean eta Irunen, 2018ko urtarrilaren 25a eta 26a

Euskal gatazka delakoaren esparruan, motibazio ideologikoen ondoriozko delituengatik preso ta iheslari dauden pertsonen gizarteratzearekin lotutako gaiei soluzio integrala emateko asmoz, adostasun zabala eta zeharkakoa sustatu eta lortu nahi dugu.

Adostasun hori, hasiera puntu bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko gizarte-, politika- eta erakunde-mailan artikulatuko da eta, berau garatu bitartean, aipatu pertsona preso ta iheslarien parte-hartzea izango du.

Euskal gizartearen beharrezko adiskidetzearen esparruan, adostasun horrek, gure ustez, motibazio politikoaren ondoriozko delituengatik preso ta iheslari dauden pertsonen itzulerari buruzko bide-orri bat prestatu, adostu eta ezarri beharko luke. Bide-orriak, emakumeek bai kartzela yta ihesian baita bergizarteratzeko unean ere aurre egin behar duten desberdintasun egoera modu espezifikoan aztertu beharko du. Bide-orri horrek esku hartzen duten eragile guztientzako jarduteko gida izan beharko luke.

Foro Sozial honek proposatzen du aipatu adostasunak –aurretik esan bezala, euskal erakunde, gizarte eta presoen artean eraiki beharko da– honako printzipio hauek izan behar dituela oinarri:

1. atala

1.- Funtsezko giza eskubideen kontra edo presoen giza trataeraren kontra doazen eta nazioarteko estandarren aurka egiten duten espetxe-politikaren neurriak bertan behera utzi behar dira. Gure ustetan, premiazko lehen urratsa da hori, eta horrek esan nahi du:

- Gaixo larriak, gaixotasun sendaezina izan edo adin handiko presoak espetxetik lehenbailehen atera ditzatela agintaritza eskudunek.

- Presoak beren familia- eta gizarte-ingurunetik urruntzeari amaiera ematea, beren bizilekuetatik gertuago dauden espetxeetara ekarrita, gizarteratzen laguntzeko loturak indar daitezen. Hortaz, eskumena duten agintariei eskatu behar zaie preso bakoitzak Euskal Autonomia Erkidegoko edo Nafarroako Foru Erkidegoko espetxeetara lekualdatzeko eskaerak onartzea.

- Presoek eskubidea dute beren zigorraren iraupenarekiko itxaropena zein den zehatz jakiteko. Hori dela eta, ezinbestekotzat jotzen dugu zigorra bete duten pertsonak askatzeko unea atzeratzeko joera duten neurri orori

amaiera ematea. Zehazki, 7/2014 Lege Organikoaren, azaroaren 12koaren, artikuluak aldatu behar dira, baliogabe uzteko Europar Batasuneko beste Estatu kideetan ebatzitako zigorren ondorioen baliokidetasun-printzipioa, 675/2008/JAI Erabaki Esparruan ezarritakoaren arabera. Hala, Estatu espainiarrean ezingo dira kontuan hartu, zigorrak luzatzeko, Estatu frantsesean ezarri eta betetako zigorrak.

- Epe luzeko zigorrak, biziarteko kartzela-zigorraren berdintsuak dituzten presoen kasuan, zigorrak berrikusteko eskubidea izan behar dute, espetxetik irteteko arrazoizko itxaropen egingarria bermatzeko. Ondorioz, indargabetu egin beharko litzateke, ankerkeriagatik, espetxetik irteteko itxaropena deuseztatzen duen arau oro.

- Ezinbestekoa da motibazio ideologikoaren ondoriozko delituengatik preso dauden euskal herritarren isolamendu eta lehen graduko neurrien aplikazio sistematikoari amaiera ematea.

- Bermatu egin behar da presoen intimitate eta familia-bizitzarako eskubidea, eta komunikazio horiek baldintza egoki eta duinetan garatu behar dira. Ildo horretatik, bisita egiteko eskubidea duten pertsonei mugak ipintzea amaitzea nahi dugu, ahozko zein idatzizko komunikazioen etengabeko kontrola eta euskarari ezartzen zaizkion oztopoak behin betiko amaitzeko. Halaber, pertsona horiei beren seme-alabekin harreman estua izateko aukera eman behar zaiela uste dugu; bereziki, espetxean beraiekin seme-alabak dituzten amen kasuan.

- Hezkuntza jaso eta ikasteko eskubidea murrizketarik gabe ahalbidetu beharko litzateke eta, horretarako, egun jartzen dituzten eragozpenak bertan behera uzteko mekanismoak ezarri behar dira.

2.- Motibazio politikoaren ondoriozko delituengatik preso dauden pertsonen espetxe-salbuespena bertan behera utzi behar da, justizia trantsizionala garatzeko aurretiazko urrats gisa. Desiragarria da arauak gizarte-errealitatera egokitzea eta, ildo horretatik, aurreko legeria arruntera itzultzea funtsezko deritzogu. Horrek honako hiru urrats hauek ematea esan nahi du:

- Motibazio politikoaren ondoriozko delituengatik preso dauden pertsonen gradu-progesio, baimen-emate eta erredentzioak sistematikoki ukatzeko politikari amaiera ematea.

- 7/2003 Lege Organikoak, ekainaren 30ekoak, zigorrak osorik eta modu efektiboan betetzeko neurriei buruzkoak biltzen dituen salbuespenezko neurriak indargabetzea; zehazki, espetxe-onurak, irteteko baimena, hirugarren graduaren sailkapena eta baldintzapeko askatasuna eskuratzeko baldintzei buruzkoak. Aipatu neurriek ezinezko egiten dute zigor askatasun-gabetzaileen gizarteratzeko helburua lortzea. Neurri horiek indargabetu ezean, neurri horiek atzeraeraginez aplikatzea ukatu behar da.

- Aurrekoaren ildotik, baldintzapeko askatasuna lehenbailehen eman behar zaie zigorraren 2/3 edo ¾ bete duten presoei.

- Martxoaren 30eko 1/2005 Lege Organikoak onartutako espetxealdi iraunkor berrikusgarria indargabetu behar da.

- Legeria aldatu behar da, jatorrizko Espetxe Zaintzako Epaitegiari itzultzeko ezarritako zigorraren betetzeari buruzko eskumenak, gerta daitezkeen aldaketei buruzko helegiteak lege eta araudien ezarritakoaren arabera ebatz ditzaten. Epaile horiei dagokie presoen eskubideak babestea eta, horretarako, espetxe-politikaren arauen betetzean gerta daitezkeen gehiegikeriak eta desbideratzeak zuzendu behar dituzte. Egun, eskumen horiek Espetxe Zaintzako Epaitegi Zentralak ditu, Auzitegi Nazionalean. Era berean, erabakiei jarritako helegiteak kasuan kasuko Probintzia Auzitegiak ebatzi beharko lituzke.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoari eta Nafarroako Foru Erkidegoari transferitu behar zaizkie espetxe alorreko eskumenak, Gernikako Estatutuan eta Foruaren Hobekuntzan ezarritakoa betetzeko. Horrekin batera, presoen gizarteratze-plan bat osatzea proposatzen dugu, goiztiarra eta indibidualizatua. Plan horrek euskal erakundeen adostasuna jaso behar du eta gizarte-eragileek zein preso dauden pertsonek parte hartu behar dute adostasun horretan. Hori bermatzeko, presoen, euskal herritarren eta erakunde eskudunen arteko harremana erraztu behar da.

Plan hori osatzeko, honako oinarri hauek proposatzen ditugu:

1) Egoera politikoa aitortzea; euskal gizartea bortizkeria eta enfrentamendu-egoeratik bake, elkarbizitza eta berradiskidetze-egoerara iragaten ari da eta, horrek, alde guztien esku-hartzea eskatzen du.

2) Biktima guztiek justizia, memoria, aitortza eta erreparaziorako duten eskubidea errespetatu behar da.

3) Presoen honako eskubide hauek betetzen direla bermatu behar da: gizarteratzea eta bake-prozesuan, normalizazioan eta berradiskidetzean parte hartu eta ekarpenak egitea. Horretarako, hirugarren graduak, baldintzapeko askatasun goiztiarrak eta gizarteratzea errazten duten beste neurri mota batzuk aplikatu behar dira.

4) Euskal bake-prozesu, normalizazio eta berradiskidetzearen baitan, motibazio politikoen ondoriozko delituengatik preso dauden pertsonek parte hartu behar dute prozesuan eta, horretarako, sakondu egin behar da bortizkeria-bide ororen gaitzespenean, bide baketsu eta demokratikoen aldeko konpromisoan eta eragindako minaren berariazko aitortzan, berau erreparatzeko borondate modura.

Bere aldetik, Foro Soziala, Harremanetarako Nazioarteko Taldearen laguntzaz, prest agertu da eragile politiko eta sozialek behar dituzten esparruak ahalbidetzeko, bide-orri egingarri bat abiarazteko aukera emango duen oinarrizko adostasuna lortzeko, ez oso epe luzera.

2. atala

Gatazkak iraun duen urte hauetan guztietan, pertsona askok beren herritik ihes egin dute motibazio politikoko delituak leporatuko zizkieten beldurrez. Tortura eta tratu txarrak modu orokortuan erabili izan dira inkomunikazio erregimeneko atxiloaldietan –praktika hori hainbat hamarkadatan zehar salatu da eta Eusko Jaurlaritzak egin berri duen txostenak egiaztatu eta zehaztu egin du– eta, hain zuzen ere, tratu txarrak eta torturak pairatzeko beldurrak ihes egitera behartu du jende asko.

Atxilotuei eginarazitako autoinkulpazioen nahiz heteroinkulpazioen ondorioz kondenatuak izateko arriskuak beldur hori areagotu du. Horri dagokionez, komeni da gogoratzea kondena asko poliziak torturapean edo tratu txarren bitartez eginarazitako deklarazio inkulpatorioetan oinarritu direla. Izan ere, hainbat hamarkadatan zehar auzitegiek kondena oinarritzeko froga nahikotzat jo dituzte poliziari egindako deklarazioak, eta halaxe jokatu dute Auzitegi Gorenak beste doktrina bat finkatu duen arte. Aspaldi ez dela aplikatzen hasi den doktrina berri horren arabera, poliziari egindako deklarazioak ezin dira frogatzat hartu eta, beraz, ezin dira kondena bat ezartzeko oinarri gisa erabili.

Bake prozesua indartzeko Foro Soziala | Foro Social para impulsar el proceso de Paz | Forum Social pour impulser le processus de paix | Social Forum to promote the Peace process

Urte askoz bizi baldintza gogorretan eta muturreko prekarietatean bizi ondoren, gaur egun iheslarien kolektiboa adin handiko pertsonez osatuta dago eta, gainera, haietako askok gaixotasunak dituzte, zenbait kasutan larriak.

Gure ustez, gaur egun abian den normalizazio eta adiskidetze prozesuak kolektibo horren espezifikotasunari ere erantzun behar dio, beharrezkoak diren irtenbideak bilatuz. Herrialdearen normalizazioak hala eskatzen du.

Norabide horretan, beharrezkotzat jotzen dugu adostasun zabal bat erdiestea iheslari guztien itzulera ahalbidetuko duen prozesu mailakatu eta ordenatu bat definitzeko. Justizia trantsizionalak prozesu hori erraztu beharko luke.

Lehen esan dugun bezala, adostasun hori Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko instituzioen, gizarte zibilaren eta iheslari nahiz deportatuen artean eraiki beharko litzateke, eta **Foro Sozial Iraunkorretik proposatzen dugu** honako irizpide hauek hartzea oinarritzat:

- Prozedura judizialik ez daukaten edo dagoeneko preskribatu diren prozedurak dauzkaten iheslarien itzulera erraztea dagokien instituzioen aldetik.

- Torturaren bidez lortutako testigantzetan oinarritutako akusazioak soilik dituzten pertsonen itzulera bermatzea, horretarako beharrezkoak diren neurriak hartuz.

- Justizia trantsizionala baliatuz, irtenbide juridiko bat artikulatzea oraindik ere “deportazio zigorra” pairatzen ari diren guztientzat. Deportazioa esaten diogu hirugarren herrialde batean halabeharrez egiten den egonaldi luze eta murriztuari, eta nabarmendu beharra dago zigor hori pairatzen dutenak inolako prozedura judizialik gabe eta, beraz, egoera hori ezarri dien inolako ebazpenik gabe izan direla deportatuak.

- Preskibatzear dauden prozedura judizialak errepresio helburuekin ez erabiltzea (preskribatu baino zenbait egun lehenago berraktibatuz –hainbatetan gertatu den bezala–, itzulera eragotziz edo espetxe zigorrak luzatuz).

- Auzitegi Nazionalak iheslarien abokatuei haien egoera juridikoaren inguruko informazioa ukatzeari uztea, ukatze horrek eragotzi egiten baitu iheslarien erregularizazio juridikoa lortzeko egon litezkeen aukerak aztertzea.

- Halaber, presoak, preso ohiak, iheslariak eta deportatuak bake eta normalizazio prozesuan partaide aktiboak izatea gomendatzen dugu.

Legedi arruntaren esparruan, irizpide humanitarioetan inspiratutako irtenbideak bilatu beharko lirateke adin handikoak direnentzat edo gaixotasun larri edota sendaezinak dituztenentzat, haien etxeratzea erraztuz.

Gainerako kasuei dagokienez, justizia trantsizionaleko neurriak zehaztu beharko lirateke bake eta adiskidetze prozesuaren baitan itzultzea erabakitzen dutenentzat. Akusazio eta egoera pertsonalen arabera, alternatibak bilatu beharko lirateke, hala nola kartzelaren ordezko zigorrak, kaleratze goiztiarrak edo espetxealdi arinduak.

3. atala

Preso ohien eta iheslarien gizarteratzea

Zigorren eta haien exekuzioaren ondorio kaltegarriak direla eta, gizarteratzea zailagoa izaten da motibazio politikoko delituengatik ezarritako zigorra bete ondoren kartzelatik irteten direnentzat.

Gainerako herritar askeen aldean, pertsona horiek diskriminazioa eta berdintasunik eza pairatzen dute eskubideen arloan, gizarteratzeak berez dakartzan zailtasunez gain.

Nazio Batuek onartutako "Estandar Integratuen" arabera, "gatazka armatuekin lotutako bake prozesu guztietan bada etapa bat zeinean borrokalariek armak uzten dituzten eta bizitza zibilean integratzen diren". Etapa konplexu horri DDR esaten zaio (Armagabetzea, Desmobilizazioa eta Gizarteratzea) eta bake prozesu guztietan bete behar da.

Estandar horien arabera, DDR deritzon etapa bakea eraikitzeko estrategia zabalago baten barnean kokatu behar da. Egonkortasuna lortzeko eta bakea eraikitzeko ezinbestekoak diren osagaietako bat da. Oinarrizko beste elementu batzuk honako hauek dira: dagokion herrialdeko herritarrak ordezkatzen dituzten indarren arteko akordio politikoak, segurtasun sistemen eta arlo horretako legediaren erreformak, eta gatazkaren biktimei egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea ziurtatu behar dizkien prozesu osoa.

Bake prozesuak askotariko ekimenez osatutako prozesu konplexuak dira, eta DDR ekimen horietako bat da.

Nazio Batuen arabera, DDR prozesuek arrakasta izan dezaten, haien xedea ezin da inola ere izan klaudikazioa, despolitizazioa, demonizazioa, marjinazioa, sobornoa, subordinazioa edo, batez ere, umiliazioa. Prozesua abian jartzen denean, gauza jakina da indarkeriazko ekintzen amaiera boluntarioa gauzatu dela eta armagabetze urratsak egiten ari direla. Beraz, era egokian garatuta, DDR prozesuak etorkizunari begira indarkeria adierazpenak prebenitzeko eta adiskidetze soziala bultzatzeko balio behar du.

DDR prozesuak ez dira formula bakar baten arabera gauzatzen. Herrialde bakoitza eta testuinguru bakoitza bakana da eta bere berezitasunak ditu. Esperientzia guztiak ezberdinak dira, baina asko ikasi ahal da beste kasu batzuetatik eta iraganeko irakaspenetatik.

Gizarteratzea DDR prozesuen atal bat da. Desmobilizazioa burutu ondoren, inplikatuta egon diren pertsonak (gure kasuan, ETAko kideak) eta horretaz akusatuta espetxean edo ihesean egon direnak "zibil bilakatzen dira eta enplegu iraunkorra nahiz diru sarrera erregularrak lortzen dituzte", Nazio Batuen Erakundearen hitzetan. Horrez gain, osasunaren arloan dituzten beharrei eta behar psikosozialei ere erantzuten zaie.

Nazio Batuen definizioak dioenez, "lehenik eta behin komunitateetan gauzatzen den prozesu sozial eta ekonomiko bat da", eta marko kronologiko ireki baten arabera garatzen da.

Gizarteratzea dagokion herrialdeko bake prozesuan kokatzen da, ardura nazionala da eta kasu askotan epe luzeko laguntza jasotzen du atzerritik.

Bi fase izan ohi ditu. Lehen fasean, ekonomiaren eta osasunaren arloko oinarrizko beharrei erantzuten zaie, epe laburreko egonkortasuna lortuz. Fase hori presazkoa eta laburra da. Bigarren fasearen helburua **bizibide iraunkorrak ematea da**, eta, horrekin batera, laguntza soziosanitario eta ekonomikoa, heziketa eta lanerako prestakuntza.

Gatazkaren biktimei egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea ziurtatzeko prozesuarekin batera, gizarteratze prozesua funtsezkoa da indarkeria atzean utzita bakea eraikitzen diharduen herrialde batean adiskidetzea bermatzeko.

Bake prozesua indartzeko Foro Soziala | Foro Social para impulsar el proceso de Paz | Forum Social pour impulser le processus de paix | Social Forum to promote the Peace process

Euskal Herriko prozesuari dagokionez, bere ezaugarriak kontuan izanik, motibazio politikoko delituak leporatuta preso edo ihesean dauden pertsonen erabateko gizarteratzea izan behar da helburu nagusia. Espetxetik irteten diren pertsonen edo Euskal Herrira itzultzen diren iheslarien gizarteratzeaz ari gara.

Gure ikuspegitik, erabateko gizarteratzeak honako ezaugarri hauek ditu:

1.- Ekonomiaren, lanaren eta prestakuntzaren arloko beharrei erantzuten die.

2.- Laguntza sanitario, psikologiko eta soziala ematen du.

3.- Eskubide zibil eta politikoak bermatzen ditu.

Adiskidetze soziala eta normalizazio osoa bultzatzeari begira, erabateko gizarteratzea –eskubide berdinekin eta diskriminaziorik gabe– gizarte osoaren helburua izan beharko litzateke, eta ez soilik kolektibo zehatz horren helburua. Hori **kontuan hartuz**, beharrezkotzat jotzen dugu honakoa:

- Preso ohiek eta iheslariek aurkitzen dituzten traba eta zailtasun legalak nahiz sozialak zehazki jasoko dituen txosten zorrotz bat egitea. Bigarren fase batean, txosten hori oinarritzat harturik, eremu publikotik nahiz pribatutik bideratu beharreko esku-hartze instituzional eta sozialak zehaztuko lirateke.

- Txosten horrek genero ikuspegi espezifikoa izan beharko du, nabaria baita desberdintasunak gizarteko arlo guztiak zeharkatzen dituela eta, beraz, eragin espezifikoa duela emakumeen gizarteratze prozesuetan eta prozesu horiek garatzeko proposamenetan.

- Elkarlanerako marko bat sortzea. Marko horrek eragile publikoak (herrialdeko instituzio publikoak), pribatuak (enpresak, sindikatuak, elkarteak) eta aipatutako kolektiboak gizarteratzeko lan egiten duten erakundeak bilduko lituzke eta haren helburua hauxe izango litzateke: lehen aipatutako txostena oinarritzat hartuz, pertsona horien erabateko gizarteratzea eta eskubide berdintasuna lortzeko beharrezkoak diren esku-hartzeak eta planak diseinatzea, bideratzea eta haien jarraipena egitea.